

El *habeas corpus* como instituto jurídico ineludible para la tutela jurisdiccional constitucional en el Perú: una mirada a la Ley N.º 31307

Habeas corpus as an unavoidable legal institute for constitutional jurisdictional protection in Peru: a look at law N.º 31307

TERÁN RAMÍREZ, Teresa Ysabel(*)

SUMARIO: I. Introducción. II. El proceso de *habeas corpus*: su significación según la regulación. III. Aspectos históricos generales del *habeas corpus*. IV. Características del *habeas corpus* a partir de la regulación. V. Tipos de *habeas corpus*. VI. Aspectos procesales del *habeas corpus* definidos en la Ley N.º 31307. VII. Reflexión en torno al proceso de *habeas corpus* a propósito del caso recaído en el Expediente N.º 139-2002-HC/TC. VIII. Conclusiones. IX. Referencias.

(*) Doctora en Derecho, Maestra en Ciencias con mención en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, y Abogada, por la Universidad Nacional de Cajamarca, Perú. Conciliadora Extrajudicial y Especializada en Familia. Árbitro. Asesora Legal. Docente, en materia jurídica y en los niveles de pre y posgrado, adscrita a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Cajamarca, Perú. Exvocal del Tribunal Universitario y secretaria académica de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Cajamarca, Perú. Correo electrónico: tyteranr@unc.edu.pe

Resumen: El artículo tiene como sustancial intención, por un lado, a fin de abundar acerca del estudio de la jurisdicción constitucional, efectuar remisión al contenido de la Ley N.º 31307, Nuevo Código Procesal Constitucional, la doctrina y la jurisprudencia nacionales, en cuanto al habeas corpus en el Perú, principal proceso fundado en la tutela a la libertad personal y a los derechos constitucionales conexos a ella. Por otro lado, asumir una particular postura reflexiva referente al modo en el que la administración de justicia especializada ha realizado actuación bajo el miramiento de la efectivización de la tutela constitucional, de cara al cumplimiento de los fines de este impar instituto jurídico.

Palabras clave: habeas corpus, Ley N.º 31307, proceso constitucional, Tribunal Constitucional

Abstract: *The article has as a substantial intention, in order to expand on the study of constitutional jurisdiction, to refer to the content of Law 31307-New Constitutional Procedure Code, the national doctrine and jurisprudence, regarding Habeas Corpus in Peru, main process based on the protection of personal freedom and the constitutional rights related to it, on the one hand; and, on the other hand, consents to assume a particular position, reflective, regarding the way in which the administration of specialized justice has carried out action under the view of making constitutional protection effective, in order to fulfill the purposes of this unique institute legal.*

Keywords: *habeas corpus, Ley N.º 31307, Constitutional process, Constitutional Court.*

I. Introducción

Previamente al tratamiento del proceso de *habeas corpus*, es imperioso hacer mención, genérica, acerca de la jurisdicción constitucional y de los procesos constitucionales —elemento integrativo de esta última—, con el objetivo de otorgar un panorama introductorio que permita mayor comprensión sobre esta materia. Así, la jurisdicción constitucional, a través de los órganos públicos que administran justicia, es aquella que “abarca tanto a la potestad instituida para tutelar la vigencia del principio de supremacía de la Constitución como a la magistratura titular de esa potestad y la regulación de las acciones y procedimientos establecidos para posibilitar su cabal eficacia” (Ríos, 2001, p. 317). De esta forma, en términos generales, la jurisdicción constitucional se configura como un peculiar escenario en el que se tutela a la Constitución, la cual “es el ordenamiento básico de Estado y sociedad; no es sólo restricción del poder estatal, sino también habilitación del poder estatal” (Häberle, 2001, p. 170); por ello, reviste relevancia y se deriva la imperiosa necesidad de custodiarla. Empero, a propósito

de la citada jurisdicción, la Constitución se comporta como norma trascendental, pues —a nuestro juicio— la sustenta y la legitima como tal. Expresión de esto es que la Constitución Política peruana de 1993, en sus artículos 201 y 202, respectivamente, reconoce la condición y las competencias del Tribunal Constitucional, el cual es un órgano que explicita su preeminencia en la consideración de que “está destinado a dar plena existencia al Estado de derecho y a asegurar la vigencia de la distribución de poderes establecida por la Constitución, ambos componentes inexcusables en nuestro tiempo del verdadero ‘Estado constitucional’” (García-Pelayo, 2014, p. 19).

Sin embargo, no puede concebirse a la jurisdicción constitucional sin el escenario en el que tiene lugar, es decir, en el *proceso constitucional*, donde se efectúa el ejercicio de la administración de justicia en atención a la observancia de parámetros legalmente establecidos e impulsados, básicamente, por el quebrantamiento al contenido de la Constitución. El referido proceso presenta una doble finalidad: “una finalidad próxima y otra finalidad última. La primera es la plena vigencia del total de los contenidos de la Constitución; la segunda es la plena realización de la persona como fin en sí misma que es” (Castillo, 2011). En esta medida, no solo se exterioriza la significancia del proceso constitucional, sino que se consiente singularizar, a este último, como uno de especial naturaleza en el marco del manejo de justicia a cargo del Estado.

Bajo este último manifiesto, el Estado, particularmente el peruano, ha establecido normativamente, en el artículo 200 de la Constitución Política de 1993, las garantías constitucionales; asimismo, mediante la Ley N.º 31307, publicada el 23 de julio de 2021 en el diario oficial *El Peruano*, ha instituido el Nuevo Código Procesal Constitucional, mismo que regula los procesos constitucionales. Los citados instrumentos reconocen *habeas corpus*, amparo, *habeas data*, cumplimiento, inconstitucionalidad, acción popular y conflictos de competencia (como Garantías y Procesos constitucionales); por lo cual, como puede notarse, libremente de su designación, los aludidos son mecanismos configurativos integrantes de la tutela jurisdiccional constitucional en el Perú.

En consecuencia, en las siguientes líneas, se abordará el proceso constitucional de *habeas corpus*, a la luz de lo prescrito por la legislación peruana, la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional del Perú, con el propósito de comprender sus principales aspectos, tales como su significación, su connotación histórica, sus características, sus tipos, sus aspectos procesales definidos en la Ley N.º 31307 y su tratamiento general jurisprudencial.

II. El proceso de *habeas corpus*: su significación según la regulación

A partir de la normativa jurídica nacional, es preciso anotar que el *habeas corpus* ostenta regulación constitucional y legal, la cual otorga un concepto acerca del mismo. En este sentido, la Constitución Política del Perú de 1993 puntualiza, en su artículo 200.1 que la acción de *habeas corpus* es una garantía constitucional que “procede ante el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexos”. Por su parte, el artículo I del Título Preliminar de la Ley N.º 31307 hace mención que el *habeas corpus* es un proceso constitucional. De esta forma, independientemente de la denominación que el constituyente y el legislador apuntaran en cuanto al *habeas corpus*, lo cierto es que este constituye un mecanismo destinado a la tutela de los derechos constitucionales a la libertad individual y a los conexos a esta. Asimismo, en tanto garantía constitucional, junto con la acción de amparo, la acción de *habeas data*, la acción de inconstitucionalidad, la acción popular y la acción de cumplimiento, en conjunto, son apreciadas como garantías constitucionales, las cuales son entendidas como “seguridades o procedimientos tuitivos de la libertad, establecidos por la Carta Política para dar efectividad a los derechos constitucionales” (Ferrero, 1969, p. 35). El *habeas corpus* se comporta como instrumento que permite dar efectividad a los derechos que salvaguarda, he allí la relevancia de esta nomenclatura; y, en tanto proceso constitucional, garantiza la vigencia efectiva de los referidos derechos, mismos que se encuentran previstos en la Constitución, así como en los tratados internacionales en materia de derechos humanos reconocidos por el Perú.

Punto aparte al concepto, las expresiones “Acción”, “Garantía” y “Proceso”:

[...] son constitucionalmente válidas para hacer referencia al Hábeas Corpus. No debe entenderse que la entrada en vigor del Código Procesal Constitucional ha hecho de la expresión *Proceso Constitucional*, la única válida. Muy por el contrario, si se quiere hablar de legitimidad, más legítimas son las expresiones *acciones garantía* o *garantías constitucionales* en la medida que éstas expresiones son recogidas por el texto constitucional. (Castillo, 2005)

En dicho sentido, al margen de su heterogénea nomenclatura en el ámbito interno, entendemos que el *habeas corpus* es un instrumento instaurado por el Estado como expresión de su soberanía interna, con despliegue en el ámbito de la jurisdicción constitucional para, por un lado, dar particular soporte a los dere-

chos constitucionales de la libertad individual, y de los constitucionales conexos a esta; así como, por otro lado, para determinar y delimitar la actuación de los órganos públicos establecidos para la tutela de la persona, en general, y de sus derechos, como tal, en particular.

III. Aspectos históricos generales del *habeas corpus*

En general, en cuanto a la aparición del *habeas corpus*, “parece remontarse al siglo XII. Su larga evolución y su muy estrecha vinculación con la historia política y constitucional de Inglaterra, han determinado en ese país la aparición de una extensa literatura en torno a esa garantía constitucional” (García, 1973, p. 48). Asimismo, conforme anota la doctrina:

Sus primeros antecedentes se encuentran en Roma, a través del Interdicto *Homine libero exhibendo*, consagrado en el título XXIX, libro XLIII del Digesto, el cual concedía a todo hombre libre, púber o impúber, varón o hembra, estuviera o no sujeto a potestad ajena, recurrir al Pretor, el cual resolvía por edicto ordenar a quien tuviere ilegalmente a otra persona exhibirla ante él (exhibe al hombre libre que retienes con dolo malo). (Nogueira, 1998, p. 193)

De esta forma, la institución anglosajona del *habeas corpus* se constituye como aquella respuesta jurídica primigenia ante abusivas e ilegítimas privaciones de la libertad personal, la cual correspondía a toda persona sin distinción de edad, género o condición de esclavo o libre; lo que importaba, únicamente, para su impetración, era la afectación a la libertad, esto es, a la posibilidad de libre locomoción que la persona ostenta en un determinado entorno.

En el Perú, la institución del *habeas corpus* tuvo regulación en el siglo XIX con la promulgación de la Ley de Habeas Corpus, el 21 de octubre de 1897, cuando Nicolás de Piérola y Villena desempeñaba el cargo de presidente de la república. En cuanto a dicha norma, se indica lo siguiente:

[...] fue resultado de un anteproyecto de ley en 1892, que fue presentado en la Cámara de Diputados el 11 de octubre de 1892 por Mariano Nicolás Valcárcel, Teodomiro A. Gadea y Mariano H. Cornejo. El proyecto de 20 cláusulas, tenía por objeto reglamentar el artículo 18 de la Constitución entonces vigente (1860) que decía: “Nadie podrá ser arrestado sin mandamiento escrito de Juez competente o de las autoridades encargadas de conservar el orden público, excepto en flagrante delito, debiendo en todo caso ser puesto el arrestado dentro de 24 horas a disposición

del Juzgado que corresponda. Los autores de dicho mandamiento, están obligados a dar copia de él siempre que se les pidiera”.

—Con posterioridad a esta ley de 1897, el ordenamiento peruano fue enriquecido por las leyes 2223 y 2253 de 1916, para tener consagración constitucional recién con el gobierno de Leguía, que la incluyó en el artículo 24 de la Carta promulgada en enero de 1920. (García, 1973, p. 59)

Como puede notarse, en el Perú, el *habeas corpus* ha sido inicialmente previsto en una norma con rango de ley para, posteriormente, a partir del texto constitucional de 1920, ostentar regulación en norma de rango constitucional. No obstante, independientemente de esto, lo cierto es que el *habeas corpus* no ha dejado de ser una institución contenida en los textos constitucionales peruanos promulgados hasta la actualidad —muestra de ello es la existencia del artículo 295 de la Constitución Política de 1979 y del artículo 200.1 de la vigente Constitución Política de 1993—.

Cabe mencionar que no se ha desvirtuado su connotación como instrumento para la tutela de la libertad personal, “no obstante, su bastardía, tiene un concepto enriquecedor: procede en procesos regulares e irregulares e inclusive en el estado de excepción: en que los jueces se pronuncian sobre la razonabilidad y proporcionalidad de una detención” (Valle, 2019). Esto nos lleva a afirmar que, a través del tiempo, dada la consideración del constituyente expresada en el articulado de las Constituciones peruanas, el *habeas corpus* es una institución no solo prevalente, sino, además, ineludible en un Estado constitucional de derecho. Respecto a esto, su perfilamiento, contenido en el Código Procesal Constitucional, precia ser una acertada medida para su mejor ejercicio.

Por último, —pero no menos importante— quepa añadir que la labor del Tribunal Constitucional peruano, a través de su función decisoria en atención a sus competencias constitucional y legalmente prescritas, ha sido útil para evidenciar la naturaleza, el tratamiento y el desarrollo del *habeas corpus* en el ámbito nacional; empero, si bien, a partir de la doctrina peruana, determinada actuación del alto tribunal de la Constitución ha sido criticada, como veremos posteriormente, se remarca el intento de dicho órgano por garantizar los derechos protegidos que supone la institución *in comento*.

IV. Características del *habeas corpus* a partir de la regulación

El *habeas corpus* presenta las siguientes características:

- Ostenta una denominación diversa: “Garantía constitucional”, “Acción”, “Proceso constitucional”. No obstante, conforme se anotó líneas preceden-

tes, la diversa denominación no enerva su naturaleza como mecanismo de tutela a la libertad individual.

- Presenta regulación constitucional, específicamente, en el artículo 200.1 de la Constitución Política del Perú de 1993. Dicho artículo la denomina como “Garantía constitucional” y como “Acción”; asimismo, precisa la procedencia del *habeas corpus* y los derechos que protege, por tanto, se considera significativo que, a nivel constitucional, se haya instituido a esta garantía, máxime si la Constitución se comporta, en un Estado Constitucional de Derecho, como sustancial elemento que orienta y circunscribe a la actividad estatal, en general, y a la actividad normativa de los órganos públicos, en particular.
- Presenta regulación legal. Así, la Ley N.º 31307 es aquella que establece su ordenación y, como consecuencia de ello, su particular tratamiento; esto queda evidenciado de la lectura del alcance de dicha norma contenido en el artículo I de su Título Preliminar y de su Título II denominado *habeas corpus*, que comprende los artículos del 29 al 38. Para mayor abundamiento, la connotación procesal de este mecanismo será referenciada en las siguientes líneas.
- En tanto proceso constitucional, su finalidad es garantizar el derecho a la libertad individual y a los derechos constitucionales conexos a esta, en caso los mismos se vean amenazados o vulnerados, ya sea por un hecho o una omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona. Esta característica nos permite afirmar que la libertad individual y los derechos constitucionales conexos a ella pueden no solo verse conculcados, sino también, amenazados por cualquier persona; empero, lo importante es que, en tales situaciones, el *habeas corpus* pueda ser una alternativa jurídica que las resista; por tal motivo, es imperioso que este instituto sea interpuesto bajo los parámetros previstos de la Constitución y de la ley.
- En tanto proceso constitucional, es de conocimiento del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Esta característica se deriva de lo señalado en el artículo IV del Título Preliminar de la Ley N.º 31307. En tal sentido, atendiendo a las atribuciones del Tribunal Constitucional, anotadas en el artículo 202.2 de la Constitución, el referido órgano conoce, en última y definitiva instancia, el *habeas corpus*. Agregado a esto, según el artículo 29 de la Ley N.º 31307, es el juez constitucional “del lugar donde se produjo la amenaza o afectación del derecho o donde se encuentre físicamente el agraviado si se trata de procesos de detenciones arbitrarias o de desapariciones forzadas”, del Poder Judicial, quien conoce en primera instancia el proceso de *habeas corpus*. A su vez:

Cuando la afectación de la libertad individual se realice en lugar distinto y lejano o de difícil acceso de aquel en que tiene su sede el juzgado donde se interpuso la demanda este dictará orden perentoria e inmediata para que el juez de paz del distrito en que se encuentra el detenido cumpla en el día, bajo responsabilidad, con hacer las verificaciones y ordenar las medidas inmediatas para hacer cesar la afectación. (Ley N.º 31307, art. 30)

En consecuencia, en primera instancia, el *habeas corpus* es de competencia del juez constitucional, pero puede actuar bajo responsabilidad del juez de paz en el marco de lo regulado por el artículo 30 de la Ley N.º 31307. Ambos sujetos actúan en atención a sus competencias, en tanto integrantes del Poder Judicial.

- Su ejercicio es permanente en el tiempo, aún durante la vigencia de un régimen de excepción; es decir, durante un estado de emergencia o un estado de sitio, para el caso peruano. Se especifica ello por cuanto así puntualiza el artículo 200 de la Constitución Política del Perú de 1993. Esta característica no es exclusiva del *habeas corpus*, sino que la conlleva con el Proceso de Amparo.
- Comparte, con los procesos de amparo, *habeas data* y cumplimiento, determinadas reglas referentes a la finalidad, a la demanda (en el supuesto de que la misma no pueda ser rechazada por los órganos jurisdiccionales, en ningún caso; y, en el uso de todo idioma distinto al castellano, observado en la presentación de la demanda), a la competencia por turno —a que el accionante pueda recurrir a la defensa pública cuando se encuentre en estado de vulnerabilidad o no cuente con recursos económicos suficientes—, a la no procedencia del rechazo liminar de la demanda, a la representación procesal del Estado, a las causales de improcedencia a las que hace referencia el artículo 7 de la Ley N.º 31307, a la procedencia de la demanda en contra de resoluciones judiciales, a los procesos constitucionales durante los regímenes de excepción, a las notificaciones, al ofrecimiento, oportunidad y valoración de los medios de prueba, a la integración de decisiones, a la cosa juzgada, al procedimiento para la represión de actos homogéneos y a la responsabilidad del agresor, que señala el artículo 17 de la Ley N.º 31307. Indíquese que lo aquí destacado se encuentra pormenorizado en los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15 y 16 del Nuevo Código Procesal Constitucional, cuyo estudio será materia de otro trabajo; empero, se ha traído a colación con el fin de conocer aún más el tratamiento legal del proceso de *habeas corpus*. Asimismo, quepa hacer prevalecer, como carácter excepcional, que:

En los procesos de *habeas corpus*, la demanda puede presentarse por escrito o verbalmente, en forma directa o por correo, a través de medios electrónicos de comunicación u otro idóneo. Cuando se trata de una demanda verbal, se levanta acta ante el juez o secretario, sin otra exigencia que la de suministrar una sucinta relación de los hechos. (Ley N.º 31307, art. 2)

- Su procedimiento tiene normas especiales; esta característica se pormenorizará en el numeral VI de este trabajo.

Las características señaladas en el presente punto han sido establecidas en atención a la regulación constitucional y legal. De ese modo, se aclaró que son de orden general y no únicas, pues, se aprecia, a medida que el legislador y el Tribunal Constitucional, en atención a sus competencias, efectúen tratamiento legislativo o jurisprudencial, respectivamente; en cuanto al *habeas corpus*, dicha institución tendrá un determinado perfilamiento o una singular caracterización.

V. Tipos de *habeas corpus*

De la revisión de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano, hemos ubicado la Sentencia recaída en el Expediente N.º 2663-2003-HC/TC, correspondiente al caso Eleobina Mabel Aponte Chuquihuanca, de fecha 23 de marzo de 2003. La actora interpone recurso extraordinario y ejerce, de este modo, el derecho de acción conforme a la normativa jurídica en contra de la Segunda Sala Penal de Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia del Cono Norte de Lima, por cuanto, esta última emitió decisión declarando la improcedencia de la demanda de *habeas corpus* de autos del proceso. No obstante, no es nuestro propósito examinar la referida sentencia, sino más bien, únicamente, concentrar nuestra atención en el fundamento 6 de la misma, pues establece una tipología del *habeas corpus*, la cual es la siguiente:

a) El *habeas corpus* reparador

Dicha modalidad se utiliza cuando se produce la privación arbitraria o ilegal de la libertad física como consecuencia de una orden policial; de un mandato judicial en sentido lato —juez penal, civil, militar—; de una decisión de un particular sobre el internamiento de un tercero en un centro psiquiátrico sin el previo proceso formal de interdicción civil; de una negligencia penitenciaria cuando un condenado continúe en reclusión pese a haberse cumplido la pena; por sanciones disciplinarias privativas de la libertad; etc.

En puridad, el hábeas corpus reparador representa la modalidad clásica o inicial destinada a promover la reposición de la libertad de una persona indebidamente detenida.

b) El hábeas corpus restringido

Se emplea cuando la libertad física o de locomoción es objeto de molestias, obstáculos, perturbaciones o incomodidades que, en los hechos, configuran una seria restricción para su cabal ejercicio. Es decir, que, en tales casos, pese a no privarse de la libertad al sujeto, “se le limita en menor grado”.

Entre otros supuestos, cabe mencionar la prohibición de acceso o circulación a determinados lugares; los seguimientos perturbatorios carentes de fundamento legal y/o provenientes de órdenes dictadas por autoridades incompetentes; las reiteradas e injustificadas citaciones policiales; las continuas retenciones por control migratorio o la vigilancia domiciliaria arbitraria o injustificada, etc.

c) El hábeas corpus correctivo

Dicha modalidad, a su vez, es usada cuando se producen actos de agravamiento ilegal o arbitrario respecto a las formas o condiciones en que se cumplen las penas privativas de la libertad. Por ende, su fin es resguardar a la persona de tratamientos carentes de razonabilidad y proporcionalidad, cuando se ha determinado cumplir un mandato de detención o de pena.

Así, procede ante la amenaza o acto lesivo del derecho a la vida, la integridad física y psicológica, o del derecho a la salud de los reclusos o personas que se encuentran bajo una especial relación de sujeción internados en establecimientos de tratamiento públicos o privados (tal el caso de personas internadas en centros de rehabilitación y de menores, en internados estudiantiles, etc.). Igualmente, es idóneo en los casos en que, por acción u omisión, importen violación o amenaza del derecho al trato digno o se produzcan tratos inhumanos o degradantes.

Es también admisible la presentación de esta modalidad en los casos de arbitraria restricción del derecho de visita familiar a los reclusos; de ilegitimidad del traslado de un recluso de un establecimiento penitenciario a otro; y por la determinación penitenciaria de cohabitación en un mismo ambiente de reos en cárcel de procesados y condenados.

d) El hábeas corpus preventivo

Éste podrá ser utilizado en los casos en que, no habiéndose concretado la privación de la libertad, existe empero la amenaza cierta e inminente de que ello ocurra, con vulneración de la Constitución o la ley de la materia.

Al respecto, es requisito *sine qua non* de esta modalidad que los actos destinados a la privación de la libertad se encuentran en proceso de ejecución; por ende, la amenaza no debe ser conjetural ni presunta.

e) El hábeas corpus traslativo

Es empleado para denunciar mora en el proceso judicial u otras graves violaciones al debido proceso o a la tutela judicial efectiva; es decir, cuando se mantenga indebidamente la privación de la libertad de una persona o se demore la determinación jurisdiccional que resuelva la situación personal de un detenido.

f) El hábeas corpus instructivo

Esta modalidad podrá ser utilizada cuando no sea posible ubicar el paradero de una persona detenida-desaparecida. Por consiguiente, la finalidad de su interposición es no sólo garantizar la libertad y la integridad personal, sino, adicionalmente, asegurar el derecho a la vida, y desterrar las prácticas de ocultamiento o indeterminación de los lugares de desaparición.

g) El hábeas corpus innovativo

Procede cuando, pese a haber cesado la amenaza o la violación de la libertad personal, se solicita la intervención jurisdiccional con el objeto de que tales situaciones no se repitan en el futuro, en el particular caso del accionante.

Cabe utilizarse cuando se presentan situaciones no previstas en los tipos anteriores. Tales como la restricción del derecho a ser asistido por un abogado defensor libremente elegido desde que una persona es citada o detenida; o de ser obligado a prestar juramento; o competido a declarar o reconocer culpabilidad contra uno mismo, o contra el o la cónyuge, etc.

Es decir, si bien no hace referencia a la privación o restricción en sí de la libertad física o de la locomoción, guarda, empero, un grado razonable de vínculo y enlace con éste. Adicionalmente, permite que los derechos innominados —previstos en el artículo 3o de la Constitución- entroncados con la libertad física o de locomoción, puedan ser resguardados.

Esta Tipología ha sido elaborada de modo casuístico, en atención a la continua evolución que ha experimentado este proceso constitucional, por lo que no puede ser tomada como un *numerus clausus* [énfasis inserto en el documento fuente]. (EXP. N.º 2663-2003-HC/TC, 2004)

Se ha reproducido el contenido de la sentencia para obtener la íntegra apreciación del Tribunal Constitucional, pues no requiere mayor interpretación dada la explicación puntual y precisa acerca de los tipos de *habeas corpus*. Sin embargo, dado que esta tipología no es perenne, se considera acertado motivar a los doctrinarios y estudiosos en el derecho constitucional y procesal constitucional a formular propuestas para incrementar la tipología citada, de cara al cumplimiento de los fines del proceso de *habeas corpus*, que se fundan, elementalmente, en la tutela a la persona y a sus derechos, como tal.

VI. Aspectos procesales del *habeas corpus* definidos en la Ley N.º 31307

En tanto proceso constitucional, el *habeas corpus* se encuentra regulado por la Ley N.º 31307. Tal norma ha inscrito, como disposiciones comunes a los procesos de amparo, *habeas data*, cumplimiento, inconstitucionalidad, acción popular y competencial, aspectos relativos a los fines (Artículo II del Título Preliminar), a los Principios Procesales (artículo III del Título Preliminar) y a los Órganos competentes (artículo IV del Título Preliminar). Sin embargo, conforme se anotó, el *habeas corpus* presenta particular régimen, de forma que, la competencia, la legitimación, las características procesales especiales, los derechos protegidos y el procedimiento se encuentran definidos y son determinantes no solo para su singularización, valga la redundancia, sino que sirven como parámetro, directriz y límite para la actuación de los jueces y las juezas, fundamentalmente, cuando ejercen su función decisoria ante supuestos de procedencia por la interposición de este instrumento.

Dicho esto, es de señalar que la Ley N.º 31307 no otorga un expreso concepto que brinde el significado del *habeas corpus*; no obstante, el artículo 200.I de la Constitución de 1993 concede un somero alcance de su connotación pues se reconoce al *habeas corpus* como una garantía constitucional o una acción, cuya procedencia es “ante el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexos”. Añadido a esto, conforme se precisó líneas arriba, la Ley N.º 31307 ha reconocido la competencia del juez constitucional para conocer este proceso en primera instancia, y el juez de paz puede realizar determina-

da actuación acorde a lo establecido en el artículo 30 de tal cuerpo normativo. Al mismo tiempo, se ha especificado, en cuanto a la legitimación, entendida como la capacidad para la interposición de este proceso ante los órganos competentes; no es nuestro propósito abundar al respecto, pero sí es oportuno resaltar que, a nivel legal, el artículo 31 de la Ley N.º 31307 instituye que la persona, ya sea la perjudicada o cualquiera a favor de ésta, sin contar con representación de la primera, así como, la Defensoría del Pueblo, podrán interponer la demanda de *habeas corpus*; sin requerir firma del letrado ni ninguna otra formalidad. Se aprecia, al respecto, que el legislador ha evaluado la singular importancia de los derechos que tutela el instituto referenciado y que, por lo mismo, ha dispuesto imprescindible que no concurra impedimento alguno que perturbe su viabilidad, dada la finalidad que ostenta.

En otro contexto, a diferencia del proceso de inconstitucionalidad, la Constitución Política de 1993 no ha señalado a los sujetos facultados para interponer la acción de *habeas corpus*; sin embargo, en la revisión de los artículos 200 y 205 del citado texto, se determina que la demanda de *habeas corpus* podrá ser interpuesta, incluso, durante la vigencia del régimen de excepción; lo cual, consideramos, fortalece a la legitimación de este proceso, configurándose la seguridad jurídica. Aunado a ello, se precisa que, habiéndose agotado la jurisdicción interna y quien se considere lesionado en un derecho, podrá acudir a la jurisdicción internacional, siempre y cuando se observe la normativa externa reconocida por el Perú; esto expresa que el alcance de la legitimación del *habeas corpus* supone que, el mismo, pueda ser interpuesto dentro del territorio nacional; por otro lado, una vez que concurran los presupuestos para acudir a la jurisdicción internacional, podrán utilizarse los instrumentos que esta exige para la observancia de sus fines, no siendo, claro está, uno de ellos, el *habeas corpus*.

En cuanto a otros aspectos reconocidos por la Ley N.º 31307, se anota que el artículo 32 reconoce un particular perfilamiento del proceso de *habeas corpus*:

El proceso de *habeas corpus* se rige también por los siguientes principios:

- 1) Informalidad: No se requiere de ningún requisito para presentar la demanda, sin más obligación que detallar una relación sucinta de los hechos.
- 2) No simultaneidad: No existe otro proceso para salvaguardar los derechos constitucionales que protege. No existen vías paralelas.
- 3) Actividad vicaria: La demanda puede ser presentada por el agraviado o cualquier otra persona en su favor, sin necesidad de contar con representación procesal.

- 4) Unilateralidad: No es necesario escuchar a la otra parte para resolver la situación del agraviado.
- 5) Imprescriptibilidad: El plazo para interponer la demanda no prescribe. (Ley 31307, art. 32)

De esta manera, el *habeas corpus* se orienta por principios, los cuales se comportan como directrices cuya utilidad es significativa, por cuanto, “informan el razonamiento y la argumentación del juez constitucional” (Expediente N.º 0005-2005-CC/TC, 2005) y “sirven para interpretar los procesos constitucionales y sus reglas” (Expediente N.º 00252-2009-PA/TC, 2009). Es de señalar que los principios de informalidad, no simultaneidad, actividad vicaria, unilateralidad e imprescriptibilidad, además de la utilidad singular reservada a los principios al interior de la actividad procesal, se comportan como elementos característicos del proceso de *habeas corpus*, y lo catalogan como un proceso sencillo, célere y práctico, bajo nuestra perspectiva. No obstante, son requisitos que no solo deben considerarse al momento de la presentación de la demanda o para la procedencia de la misma, sino, también, en conjunto con los principios procesales contenidos en el artículo III del Título Preliminar del Nuevo Código Procesal Constitucional —dirección judicial, economía, intermediación, socialización, gratuidad, impulso de oficio, *pro actione*—, porque son cardinales para el resultado de la efectiva tutela constitucional, en sentido genérico, toda vez que esta es la razón de ser del *habeas corpus* y de los demás procesos constitucionales establecidos con dicho propósito.

Asimismo, el Capítulo II, denominado “Derecho Protegidos”, de la Ley N.º 31307, regula lo siguiente:

Procede el *habeas corpus* ante la acción u omisión que amenace o vulnere los siguientes derechos que, enunciativamente, conforman la libertad individual:

- 1) La integridad personal y el derecho a no ser sometido a tortura o tratos inhumanos o humillantes, ni violentado para obtener declaraciones.
- 2) El derecho a no ser obligado a prestar juramento ni forzado u obligado a declarar o reconocer culpabilidad contra sí mismo, contra su cónyuge o conviviente, o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.
- 3) El derecho a no ser exiliado sino por sentencia firme.
- 4) El derecho a no ser desterrado, expatriado o confinado por autoridad administrativa por razones políticas, raciales, culturales, étnicas o por cualquier otra índole.

- 5) El derecho a no ser separado del lugar de residencia o expulsado del país sino por mandato judicial o por aplicación de la ley correspondiente.
- 6) El derecho del extranjero, a quien se ha concedido asilo político, de no ser expulsado al país cuyo gobierno lo persigue, o en ningún caso si peligrase su libertad o seguridad por el hecho de ser expulsado.
- 7) El derecho de los nacionales o de los extranjeros residentes a ingresar, transitar o salir del territorio nacional, salvo mandato judicial o aplicación de la ley correspondiente.
- 8) El derecho a no ser detenido sino por mandato escrito y motivado del juez, o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito; o si ha sido detenido, a ser puesto dentro de las 48 horas más el término de la distancia, a disposición del juzgado que corresponda, de acuerdo con el acápite f) del inciso 24) del artículo 2 de la Constitución, sin perjuicio de las excepciones que en él se consignan. En ningún caso debe interpretarse que las 48 horas a las que se refiere el párrafo precedente o el que corresponda según las excepciones constitucionales es un tope indispensable, sino el máximo a considerarse a nivel policial.
- 9) El derecho a decidir voluntariamente prestar el servicio militar, conforme a la ley de la materia.
- 10) El derecho a no ser detenido por deudas, salvo en el caso del delito de omisión de asistencia familiar.
- 11) El derecho a no ser privado del documento nacional de identidad, así como de obtener el pasaporte o su renovación dentro o fuera de la República.
- 12) El derecho a no ser incomunicado sino en los casos establecidos por el literal g) del inciso 24) del artículo 2 de la Constitución.
- 13) El derecho a no ser sometido a esclavitud, servidumbre, explotación infantil o trata en cualquiera de sus modalidades.
- 14) El derecho a ser asistido por un abogado defensor libremente elegido desde que se es citado o detenido por la autoridad policial u otra, sin excepción.
- 15) El derecho a retirar la vigilancia del domicilio y a suspender el seguimiento policial, cuando resulten arbitrarios o injustificados.
- 16) El derecho a la excarcelación de un procesado o condenado, cuya libertad haya sido declarada por el juez.
- 17) El derecho a que se observe el trámite correspondiente cuando se trate del procedimiento o detención de las personas, a que se refiere el artículo 99 de la Constitución.

- 18) El derecho a no ser objeto de ejecución extrajudicial y/o desaparición forzada.
- 19) El derecho a la verdad, de conformidad con su reconocimiento jurisprudencial.
- 20) El derecho del detenido o recluso a no ser objeto de un tratamiento carente de razonabilidad y proporcionalidad, respecto de la forma y condiciones en que cumple el mandato de detención o la pena.
- 21) El derecho a la protección de la familia frente a actos de violencia doméstica.
- 22) El derecho a la defensa de los derechos constitucionales conexos con la libertad individual. (Ley 31307, art. 33)

Así, se ha establecido un conjunto de derechos fundamentales que, en caso de amenaza o vulneración a los mismos, se podrá interponer demanda de *habeas corpus*; tales derechos tienen relación con la libertad personal y los derechos constitucionales conexos a ella, según el numeral 22 del artículo 33 de este último caso. Si bien no se pretende abundar sobre el tema, es menester estatuir que los referidos derechos son protegidos por el *habeas corpus*, debido a que este instituto tiene como fin otorgar tutela urgente a los derechos que, por su representación de fundamentales, la requieran durante determinado contexto. De manera que, al ser examinados por el juzgador o la juzgadora, corresponderá observar que “la capacidad de respuesta del órgano de control a un problema planteado, entre ellos el hábeas corpus, debe ser suficiente, congruente y razonable, desde la propia noción de tutela urgente que implica la defensa de un derecho fundamental” (Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional del Perú, 2018); máxime si los derechos fundamentales son “una serie de exigencias humanas que, formuladas como bienes humanos, son debidos a la persona por ser tal” (Castillo, 2010, p. 93). Por ello, “son derechos de la persona reconocidos por el Estado y no otorgados por éste” (Expediente N.º 1417-2005-AA/TC, 2005), he allí su particular significación, sobre todo, en un Estado constitucional de derecho, donde su tutela es de forma urgente e inexorable.

En cuanto al procedimiento del *habeas corpus*, se han establecido los siguientes trámites:

Cuadro 1

Trámites del *habeas corpus*,
según los artículos 34, 35 y 36 de Ley N.º 31307

Tipo de trámite	Actividad general del juez o de la jueza	Otras actuaciones del juez o de la jueza	Actuaciones de otros sujetos procesales
<p>Trámite en caso de detención arbitraria y de afectación a la integridad personal Base legal: artículo 34 de Ley N.º 31307</p>	<p>Resuelve de inmediato.</p>	<p>- Tiene la facultad de constituirse en el lugar de los hechos para verificar la detención indebida alegada. - Si corrobora la detención arbitraria, ordenará, en el mismo lugar, la libertad del agraviado y deja constancia en el acta correspondiente y sin que sea necesario notificar previamente al responsable de la agresión para que cumpla la resolución judicial. (Ley N.º 31307, art. 34)</p>	<p>El artículo 34 de la Ley N.º 31307 no especifica actuación, a observar, por otros sujetos procesales.</p>
<p>Trámite en casos distintos (Cuando no se trate de una detención arbitraria ni de una vulneración a la integridad personal) Base legal: artículo 35 de Ley N.º 31307</p>	<p>El juez podrá constituirse en el lugar de los hechos o, de ser el caso, citar a quien o quienes ejecutaron la violación, y deben explicar la razón que motivó la agresión. De ese modo, el juez resolverá de plano, en el término de un día natural, bajo responsabilidad.</p>	<p>Si las circunstancias lo requieren, el juez o la jueza, dentro de 72 horas de admitida la demanda, fija fecha para la realización de audiencia única. - Después de escuchar las alegaciones de las partes, el juez o la jueza, si se ha formado juicio, pronuncia sentencia en el acto o, en caso contrario, lo hará en el plazo indefectible de tres días calendario. La resolución podrá notificarse al agraviado, así se encontrará privado de su libertad. También puede notificarse indistintamente a la persona que interpuso la demanda, así como a su abogado, si lo hubiere.</p>	<p>Las partes pueden solicitar copia de los audios y videos de la audiencia pública.</p>

<p>Trámite en caso de desaparición forzada Base legal: artículo 36 de Ley N.º 31307</p>	<p>Si la autoridad, funcionario o persona demandada no proporcionan elementos de juicio satisfactorios sobre su paradero o destino, el juez deberá adoptar todas las medidas necesarias que conduzcan a su hallazgo.</p>	<p>Puede, incluso, comisionar a jueces del distrito judicial donde se presume que la persona pueda estar detenida para que las practiquen. Asimismo, el juez dará aviso de la demanda de <i>habeas corpus</i> al Ministerio Público para que realice las investigaciones correspondientes. Si la agresión se imputa a algún miembro de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas, el juez solicitará, además, a la autoridad superior del presunto agresor de la zona en la cual la desaparición ha ocurrido, que informe dentro del plazo de veinticuatro horas si es cierta o no la vulneración de la libertad y debe proporcionar el nombre de la autoridad que la hubiere ordenado o ejecutado, bajo expresa responsabilidad en la declaración que pueda formularse.</p>	<p>El artículo 36 de la Ley N.º 31307 no especifica actuación a observar por otros sujetos procesales.</p>
---	--	---	--

Nota. Este cuadro reproduce los aspectos prescritos en los artículos 34, 35 y 36 de la Ley N.º 31307, los cuales reconocen expresamente tres tipos de trámite que orientan el procedimiento del *habeas corpus*: 1) trámite, en caso de detención arbitraria y de afectación a la integridad personal; 2) trámite, en casos distintos (Cuando no se trate de una detención arbitraria ni de una vulneración a la integridad personal), y 3) trámite, en caso de desaparición forzada. Cada trámite tiene características particulares, como las que se dejan notar; sin embargo, en todos los trámites, es indispensable la actuación del juez o de la jueza competente, cuyo actuar está orientado, de forma puntual, a la tutela de los derechos alegados como amenazados o vulnerados. En cuanto a la actuación de las partes procesales, se entiende que las mismas realizarán acción orientada a la defensa de sus derechos e intereses, en el marco del ejercicio del debido proceso, que les asiste. Asimismo, en todos los trámites se deja notar el carácter de proceso de tutela urgente que reviste el *habeas corpus*.

Finalmente, la Ley N.º 31307 deja prescripto que el *habeas corpus* tiene normas especiales de procedimiento, con tal fin se indica lo siguiente:

Este proceso se somete además a las siguientes reglas:

- 1) No cabe recusación, salvo por el afectado o quien actúe en su nombre.
- 2) No caben excusas de los jueces ni de los secretarios.
- 3) Los jueces deberán habilitar día y hora para la realización de las actuaciones procesales.
- 4) No interviene el Ministerio Público.
- 5) Se pueden presentar documentos cuyo mérito apreciará el juez en cualquier estado del proceso.
- 6) El juez o la sala designará un defensor de oficio al demandante, si lo pidiera.
- 7) Las actuaciones procesales son improrrogables.
- 8) No hay vista de la causa, salvo que lo pida el demandante o el favorecido. (Ley N.º 31307, art. 37)

En este sentido, desde nuestro punto de vista, el *habeas corpus* se presenta como un proceso donde el rol fundamental es ostentado por el juez o la jueza competente, pues toda la actuación del órgano jurisdiccional apunta a un solo objetivo: garantizar la vigencia del derecho que se alega, en el marco del debido proceso. Por lo cual, es necesario que se cuente con un escenario procedimental célere y práctico; y, entendemos que, el legislador peruano ha querido dar esta connotación al *habeas corpus*, pues el mismo se funda como un elemento idóneo para la tutela urgente de los derechos fundamentales, en especial, de los que protege.

Finalmente, en cuanto al contenido de la sentencia expedida como parte del proceso de *habeas corpus*, en caso sea estimatoria, se observa lo siguiente:

La resolución que declara fundada la demanda de *habeas corpus* dispondrá alguna de las siguientes medidas:

- 1) La puesta en libertad de la persona privada arbitrariamente de este derecho; o
- 2) que continúe la situación de privación de libertad de acuerdo con las disposiciones legales aplicables al caso, pero si el juez lo considerase necesario, ordenará cambiar las condiciones de la detención, sea en el mismo establecimiento o en otro, o bajo la custodia de personas distintas de las que hasta entonces la ejercían; o

- 3) que la persona privada de libertad sea puesta inmediatamente a disposición del juez competente, si la agresión se produjo por haber transcurrido el plazo legalmente establecido para su detención; o
- 4) que cese el agravio producido, disponiendo las medidas necesarias para evitar que el acto vuelva a repetirse. (Ley N.º 31307, art. 38)

Por tanto, el juez o la jueza, establecerá, en la sentencia, estas medidas tendientes a cumplir la finalidad del proceso de *habeas corpus*. Asimismo, opinamos, de no observarlas, la sentencia se catalogaría como “defectuosa”, aspecto que no se condice con el debido proceso y con los fines de la jurisdicción constitucional.

VII. Reflexión en torno al proceso de *habeas corpus* a propósito del caso recaído en el Expediente N.º 139-2002-HC/TC

De la lectura del trabajo realizado por el profesor Espinosa-Saldaña Barrera, titulado *Habeas corpus contra resoluciones judiciales: un escenario en constante evolución*, nos han surgido algunas reflexiones en torno al modo en el que el Tribunal Constitucional ha conocido, en su momento, el caso Luis Guillermo Bedoya de Vivanco, recaído en el Expediente N.º 139-2002-HC/TC, cuya sentencia es de fecha 19 de enero de 2002. Dicho caso ha sido conocido por los exmagistrados del Tribunal Constitucional, Aguilar Roca, Rey Terry, Nugent, Díaz Valverde, Acosta Sánchez, Revoredo Marsano, a propósito del recurso extraordinario interpuesto contra la resolución de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima el 7 de enero del 2002, que declaró improcedente la acción de *habeas corpus* que oportunamente se formuló.

Esta sentencia atrae nuestra atención, por cuanto, a través de un recurso extraordinario se pretendió cuestionar el fondo del asunto establecido en una demanda de *habeas corpus*, la cual fue interpuesta con el fin de que el órgano jurisdiccional variara la medida coercitiva de detención por la de comparecencia, que le fuera aplicada al señor Bedoya, en tanto parte procesal del proceso de peculado seguido en su contra; ello, por cuanto, entre otras razones, no se acreditó fehacientemente que él haya cometido el delito de peculado, que no fue funcionario público y que cuenta con arraigo. Sin embargo, al haber declarado, a las instancias competentes de la judicatura, la improcedencia de su requerimiento, por considerar que la actuación procesal ha sido de carácter regular, alega ante el Tribunal Constitucional, mediante el recurso extraordinario que presentara, violaciones al debido proceso y la existencia de un proceso irregular.

Sin embargo, ¿en qué consistió la labor del Tribunal Constitucional para afirmar que se pronunció sobre el fondo del asunto? La respuesta a esta interrogante nos la otorga la decisión de dicho órgano, que es la siguiente:

REVOCANDO la recurrida que declaró improcedente la acción de *habeas corpus* Y; REFORMANDOLA declara FUNDADA la acción de *habeas corpus* interpuesta por don Luis Guillermo Bedoya de Vivanco, y en consecuencia, ordena dejar sin efecto el mandato de detención dictado en su contra en el proceso seguido ante el Primer Juzgado Penal Especial, Expediente N.º 13-01, debiendo disponerse su inmediata excarcelación, sin perjuicio de tomarse las medidas procesales pertinentes para asegurar su presencia en el proceso. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados. (Exp. N.º 139-2002-HC/TC, 2002)

Como puede apreciarse, el Tribunal Constitucional conoció el proceso de *habeas corpus*, y modificó, como consecuencia de dicha labor, las decisiones de los órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancia que emitieron pronunciamiento sobre el fondo del asunto, en mérito a sus atribuciones legítimas; no obstante, al respecto, estamos de acuerdo con el profesor Eloy Espinosa-Saldaña Barrera en que el Tribunal Constitucional se convirtió en un órgano que asumió competencias que, por mandato, no le corresponden, desconociendo el rol y la competencia del juez penal, quien está calificado para decidir en un proceso de *habeas corpus*, afectando así al principio de Competencia Funcional que informa el derecho procesal constitucional. Asimismo, con tal actuación, el Tribunal Constitucional desnaturalizó al *habeas corpus* y, por ende, en vez de aplicar soluciones razonables al caso, lo único que hizo fue otorgar un tratamiento irregular a este proceso. En consecuencia, el caso Luis Guillermo Bedoya de Vivanco es un ejemplo de cómo el propio órgano tuitivo de la Constitución, el Tribunal Constitucional, ha extralimitado sus competencias y ha desvirtuado, así, un esencial proceso: el *habeas corpus*.

Por tanto, consideramos que el *habeas corpus* debe interponerse y conocerse, según lo prescribe la normativa, bajo la perspectiva de que pueda cumplir su finalidad y no ser un elemento para que “el justiciable pueda querer convertir al *habeas corpus* en un nuevo espacio para debatir lo ya discutido por la judicatura ordinaria” (Espinosa-Saldaña, 2008, p. 84).

VIII. Conclusiones

- La jurisdicción constitucional es un escenario legalmente configurado con el fin de que los derechos fundamentales, de titularidad de la persona, puedan ostentar tutela urgente en caso se presente amenaza o afectación a los mismos. Con dicho fin, se ha erigido un aparato jurisdiccional, cuyas competencias —fundadas en norma jurídica— garanticen el valor superior de justicia, tan esencial en un estado constitucional de derecho.
- El *habeas corpus*, denominado como garantía constitucional, acción y proceso, reviste singular tratamiento —constitucional y legal— en el Perú. Así, el artículo 200.1 de la Constitución Política peruana de 1993 reconoce su procedencia para los supuestos en que los derechos a la libertad personal, y los constitucionales conexos a esta, se vean amenazados o conculcados por cualquier persona y durante cualquier modo y tiempo; por su parte, la Ley N.º 31307 instituye un particular tratamiento a este proceso, especificando su finalidad y, en definitiva, su procedimiento.
- Es la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano aquella que se ha encargado de perfilar el *habeas corpus* en el Perú. Empero, dicho instrumento se comporta como un proceso que, en atención al avance temporal, se irá fortaleciendo no solo en su ejercicio sino, en su esencia, como mecanismo de tutela apremiante para los casos previstos, tan relevantes *per se*.

IX. Referencias

- Castillo Córdova, L. (2005). La finalidad del Hábeas Corpus. *Revista peruana de jurisprudencia*, (53), 31-54. <https://hdl.handle.net/11042/1914>
- Castillo Córdova, L. (2010). El contenido constitucional de los derechos fundamentales como objeto de protección del amparo. *Anuario iberoamericano de justicia constitucional*, (14), 89-118.
- Castillo Córdova, L. (2011). Procesos constitucionales y principios procesales. En M. Martínez (Ed.), *Derecho procesal constitucional* (pp. 107-131). Lima: Ediciones Legales.
- Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional del Perú. (2018). *El hábeas corpus en la actualidad posibilidades y límites*. Servicios Gráficos JMD.
- Espinosa-Saldaña, E. (2008). Habeas corpus contra resoluciones judiciales: un escenario en constante evolución. *Cuadernos de análisis y crítica a la jurisprudencia constitucional*, (5), 69-88.

- Expediente N.º 00252-2009-PA/TC, 00252-2009. (2009, 7 de octubre). Tribunal Constitucional del Perú. <https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/00252-2009-AA.html>
- Expediente N.º 1417-2005-AA/TC, 1417-2005 (2005, 8 de julio). Tribunal Constitucional del Perú. <https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/01417-2005-AA.html#:~:text=En%20tanto%20derechos%20fundamentales%2C%20son,y%20no%20otorgados%20por%20%20C3%A9ste.>
- Expediente N.º 2663-2003-HC/TC, 2663-2003 (2004, 23 de marzo). Tribunal Constitucional del Perú. <https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2004/02663-2003-HC.pdf>
- Expediente N.º 139-2002-HC/TC, 139-2002 (2002, 29 de enero). Tribunal Constitucional del Perú. <https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2002/00139-2002-HC.pdf>
- Expediente N.º 0005-2005-CC/TC, 0005-2005 (2005, 18 de noviembre). Tribunal Constitucional del Perú. <https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/00005-2005-CC.pdf>
- Ferrero Rebagliati, R. (1969). Garantías Constitucionales. *Derecho PUCP*, (27), 35-41.
- García Belaúnde, D. (1973). Los orígenes del Hábeas Corpus. *Derecho PUCP*, (31), 48-59.
- García-Pelayo, M. (2014). El “status” del Tribunal Constitucional. *Revista Española de Derecho Constitucional*, (100), 15-37.
- Häberle, P. (2001). La Jurisdicción Constitucional institucionalizada en el Estado constitucional. *Anuario iberoamericano de justicia constitucional*, (5), 169-182.
- Ley N.º 31307. (23 de julio de 2021). Nuevo Código Procesal Constitucional. *El Peruano* (16133). <https://busquedas.elperuano.pe/download/full/FReh7huu4-gAfl0PQRADt8>
- Nogueira Alcalá, H. (1998). El habeas corpus o recurso de amparo en Chile. *Revista de Estudios Políticos (Nueva Época)*, (102), 193-216.
- Ríos, L. (2001). Elementos fundamentales de la justicia constitucional. *Anuario iberoamericano de justicia constitucional*, (5), 309-334.
- Valle, J. (5 de Marzo de 2019). El Hábeas Corpus en el Perú. *La razón*. <https://larazon.pe/el-habeas-corpus-en-el-peru/>